



RESOLUCIÓN RECTORAL N° 057-2026-UNAAA/R

Yurimaguas, 05 de agosto de 2026.

VISTO: El Informe de Prescripción N° 01-2026-UNAAA-R-STPAD, de fecha 06 de julio de 2026, emitido por la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad Autónoma de Alto Amazonas; el expediente administrativo disciplinario N° 006-2024-UNAAA/ST-PAD, y;



CONSIDERANDO:

Que, con la dación de la Ley N.° 30057 se aprobó un nuevo Régimen del Servicio Civil para las personas que prestan servicios en las Entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran.



Que, a través del Título V de la acotada Ley, se estableció las disposiciones que regularían el Régimen Disciplinario y el Procedimiento Sancionador, las mismas que acorde a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la referida Ley, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma reglamentaria sobre la materia.

Que, en ese contexto, mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de junio del 2014 se aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria se estableció que, el Título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir del 14 de septiembre del 2014.

En el presente caso, los hechos materia de evaluación se atribuyen a servidores y funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas – UNAAA, quienes al momento de ocurrencia de los hechos (años 2023 y 2024) mantenían vínculo funcional con la entidad en el ejercicio de cargos de dirección, confianza, asesoramiento y apoyo administrativo. En tal sentido, al tratarse de servidores civiles sujetos al régimen disciplinario aplicable en la administración pública, corresponde analizar los hechos conforme a las disposiciones de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N.° 040-2014-PCM y la Directiva del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador vigente. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley N.° 30057 y el artículo 90 de su Reglamento General, los servidores civiles se encuentran sujetos a responsabilidad administrativa disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes funcionales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de los mismos hechos. En consecuencia, corresponde efectuar el análisis de la potestad disciplinaria de la entidad respecto de los hechos denunciados, así como verificar la vigencia del plazo de prescripción previsto en el artículo 94 de la Ley N.° 30057;

ANTECEDENTES

Que, mediante Carta S/N-2024-KJSC, de fecha 18 de noviembre de 2024, la Sra. Katherine de Jesús Salazar Cárdenas, remite al Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la UNAAA, denuncia para investigación administrativa por la presunta comisión del literal h) artículo 85 de la Ley 30057- Ley del Servicio Civil.

Que, mediante Nota de Coordinación N° 083-2024-UNAAA-DGOGAYf-UGRH, de fecha 20 de noviembre de 2024, Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la UNAAA, remite a la Secretaría Técnica (e) del PAD, denuncia para investigación administrativa por la presunta comisión del literal h) artículo 85 de la Ley 30057- Ley del Servicio Civil.

DE LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.



La prescripción limita la potestad punitiva del Estado, puesto que tiene como efecto que la autoridad administrativa deja de tener competencia para perseguir al servidor civil, lo cual implica que al vencimiento del plazo establecido sin que se haya instaurado el procedimiento administrativo disciplinario, prescribe la facultad de la Entidad para dar inicio al procedimiento correspondiente, debiendo consecuentemente declarar prescrita dicha acción administrativa.



El Tribunal Constitucional en el fundamento Tercero de la Sentencia recaída en el Expediente N.° 2775-2004-AA/TC, ha precisado que:

"La figura jurídica de la prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos, puesto que esta institución del derecho administrativo sancionador no solo tiene la función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario".



El Tribunal Constitucional en el marco de los procesos penales, mediante el fundamento 6 de la Sentencia recaída en el Expediente N.° 01912-2012-HC/TC, ha precisado que:

"La prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional toda vez que se encuentra vinculada al contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso".

Asimismo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República en la Casación N.° 2294-2012-La Libertad, afirmó que:

"El derecho a prescribir tiene rango constitucional, según lo previsto por el artículo 139° numeral 13 de la Constitución Política del Estado".

Por otra parte, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, ha establecido como precedente vinculante lo siguiente:

"21. Así, de los textos antes citados, puede inferirse que la prescripción es una forma de liberar a los administrados de las responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por la inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de su poder sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y, por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser considerada como una regla sustantiva."

En ese orden de ideas sostenemos que, al establecerse un plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, en contra de aquellos servidores civiles que incurran en alguna falta administrativa, no es más que el reconocimiento del derecho a prescribir como parte del derecho fundamental al debido proceso.

Respecto a ello, el artículo 173° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa establece *"El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar"*.

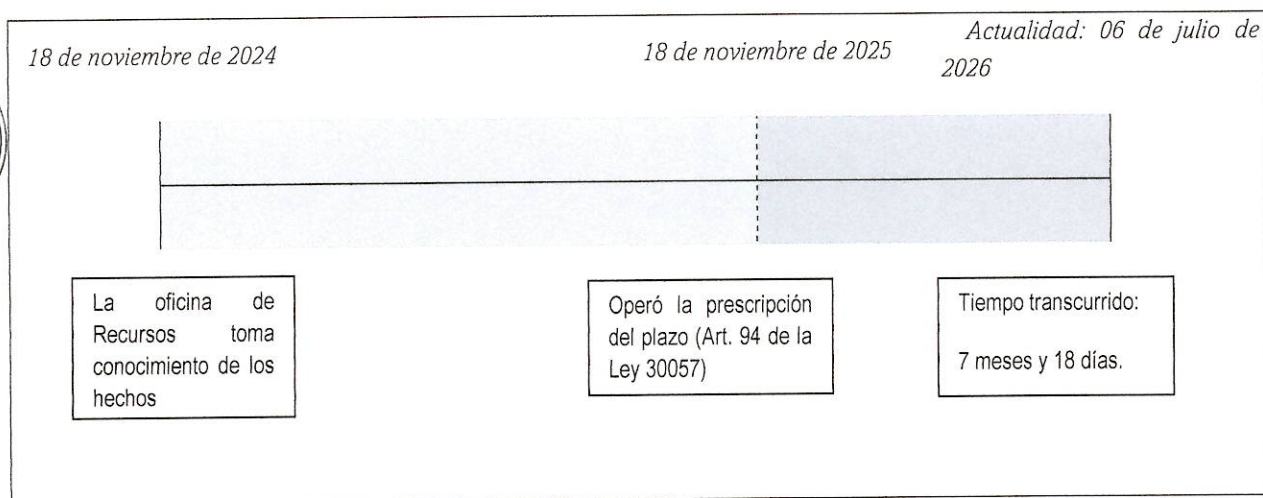
Asimismo, el artículo 163 del mismo cuerpo normativo señala: *"El servidor público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, será sometido a proceso administrativo disciplinario que no excederá de treinta (30) días hábiles improrrogables."*

Es así que el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, ha visto por conveniente establecer que, para el inicio del procedimiento disciplinario, se cuenta con un plazo no mayor de un (1) año contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria. Además, señala el plazo máximo que debe durar el procedimiento disciplinario que son treinta (30) días hábiles improrrogables.



De la revisión de los actuados, se tiene que con fecha 18 de noviembre de 2024, mediante Carta S/N-2024-KJSC, se dio a conocer al jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la UNAAA, la presunta comisión de la falta del literal h) del artículo 85 de la ley 30057, contra LOS SERVIDORES CARLOS JACINTO LA ROSA LOGOBARDI, con DNI N°08093718, MOISES GARCIA BENZAQUEN, con DNI N° 00082976, ROSA ELIZABETH ANGELDONES VIGO, con DNI N° 46864431, BRENDIN REATEGUI RIVAS, con DNI N° 40407283, por lo que, de acuerdo al cómputo de plazo, esto debió prescribir el 09 de octubre de 2022. En ese sentido, la Entidad debió declarar la misma conforme el marco legal que regula dicha figura jurídica.

En ese orden de ideas y luego de analizar los actuados del expediente administrativo en cuestión, lo expuesto en los párrafos precedentes se puede apreciar de forma ilustrativa en el siguiente cuadro:



Que, en ese sentido, habiéndose constatado que el plazo para iniciar el respectivo procedimiento administrativo disciplinario contra quien resultase involucrado, a través de la emisión del acto y su respectiva notificación, superó el máximo legal establecido, corresponde declarar de oficio la prescripción, conforme a las normas citadas en líneas precedentes;

Que, asimismo, corresponde adoptar las acciones conducentes a determinar la responsabilidad administrativa ante la omisión de trámite del presente expediente dentro del plazo legalmente establecido, la cual ocasionó que la potestad disciplinaria de la entidad prescriba por el transcurrir del tiempo; y, a su vez, determinar si existe algún motivo que justifique el retraso en su atención por parte de la autoridad competente.

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN.

El inciso 97.3 del artículo 97° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, literalmente prescribe que: La prescripción será declarada por el Titular de la Entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley del Servicio civil, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la Entidad es la máxima autoridad administrativa de una Entidad Pública.

En ese sentido, en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, la máxima autoridad administrativa es el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas Yurimaguas, siendo su competencia y atribución emitir el acto administrativo que declare prescrita la acción punitiva de esta Entidad en el presente caso.

Estando a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos precedentemente, esta Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas-Yurimaguas.



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas en el Procedimiento Administrativo, seguido contra los administrados CARLOS JACINTO LA ROSA LOGOBARDI, con DNI N°08093718, MOISES GARCIA BENZAQUEN, con DNI N° 00082976, ROSA ELIZABETH ANGELDONES VIGO, con DNI N° 46864431, BRENDIN REATEGUI RIVAS, con DNI N° 40407283, al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio, para concluir el Procedimiento Administrativo Disciplinario desde que se inició el mismo, conforme el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa; sin que se haya tomado las acciones correspondiente del presente caso por parte de la autoridad administrativa correspondiente para dar inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER el Archivo del presente Expediente N° 006-2024- UNAAA/ST-PAD, debido a que resulta inoperante la prosecución para determinar la responsabilidad por inacción administrativa derivada de la prescripción declarada en el artículo precedente

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, proceda al deslinde de responsabilidad administrativa de los que resulten responsables y luego de las investigaciones del caso, por haber permitido que opere la prescripción en el presente caso.

ARTICULO CUARTO. – PUBLICAR, la presente resolución en el portal institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas: www.unaaa.edu.pe para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE ALTO AMAZONAS

Abg. BRAIAN ALEJANDRO MAX ZEGARRA
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE ALTO AMAZONAS

PhD. ENRIQUE AREVALO GARDINI
RECTOR

DISTRIBUCION:

Rectorado

Secretaría General

Oficina de Tecnologías de la Información

Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios